

Castro, Marlen y Meza, Francisca, “Policías estatales y municipales desalojan a ejidatarios en Los Filos”, *La Jornada Guerrero*, Guerrero, 26 de enero, 2007.

Dirección electrónica:

<http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2007/01/26/index.php?section=sociedad&article=006n1soc>

En dos ocasiones, la primera con violencia, policías estatales y del municipio de Eduardo Neri desalojaron a los ejidatarios de Carrizalillo que desde el lunes 8 de enero mantenían bloqueado el acceso a la mina Los Filos en demanda de un nuevo contrato por las 700 hectáreas que ocupa la empresa.

Los campesinos fueron privados de su libertad alrededor de cuatro horas, pero cuando quedaron libres retomaron el sitio, lo que propició un nuevo desalojo. Posteriormente, cuando más gente de Carrizalillo acudió a apoyarlos, volvieron a posesionarse del lugar, y así permanecían hasta ayer por la noche.

Durante ese lapso, según versión de testigos, la empresa comenzó a mover su maquinaria y a trasladar a los trabajadores al complejo minero.

El primer desalojo fue alrededor de las 5:30 de la mañana, a cargo de más de 100 policías estatales y del municipio de Eduardo Neri, quienes llegaron en siete camionetas y una unidad de antimotines.

“Llegaron gritando y nos despertaron con manotazos. Estábamos dormidos, nos agarraron por sorpresa”, narraron los ejidatarios Julio Peña Celso, Julio Maturana, Francisco Peña y Ubaldo Adame, entre otros, quienes llegaron como a las 12 de la mañana a presentar su queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

Julio Peña narró, sobre el primer desalojo, que exigieron a los policías mostrar la orden de desalojo y que éstos reconocieron que no la traían, pero dijeron que no la necesitaban.

Había en el campamento unas 70 personas entre hombres, mujeres y niños. Como los policías eran más de 100 e iban armados, los ejidatarios sopesaron la situación y no opusieron resistencia, pues para entonces los policías ya habían golpeado a algunos.

“A doña Romelia Adame Catalán fue a quien le fue más mal. Les reclamó a los policías que se querían llevar a un niño: ¿a él por qué? Está muy pequeño. Entonces la golpearon”, detallaron. También resultó golpeada María Ávila, ambas de avanzada edad, la primera con diabetes.

Los desalojados, mujeres, hombres y niños, fueron trasladados a la cárcel municipal de Eduardo Neri, donde fueron puestos en libertad cuatro horas después.

Tras horas de incertidumbre, los campesinos que acudieron a la Coddehum cuentan que simplemente les abrieron las puertas y dijeron que podían marcharse, que no había nada contra ellos.

Otra vez libres, unos 30 regresaron al bloqueo, mientras otros viajaron a la capital a presentar la denuncia a la Coddehum.

Para esos momentos unos 200 policías antimotines resguardaban el acceso a la mina, ubicada entre las poblaciones de Mezcala y Carrizalillo, ambas del municipio de Eduardo Neri.

Antimotines observaron reubicarse a los campesinos. Dejaron correr 30 minutos y otra vez actuaron para quitarlos. Los pobladores no opusieron resistencia, pero ante la llegada de más habitantes de Carrizalillo volvieron a instalarse, sin que hasta la noche hubieran sido desalojados nuevamente.

La queja presentada por los campesinos desalojados y detenidos quedó asentada con el número 028/2007/1 por ejercicio indebido de la función pública y detención arbitraria, informó el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés.

La crisis en Carrizalillo por los desalojos ocasionó un movimiento inusitado en el ayuntamiento de Eduardo Neri. Desde las 9 horas, contaron empleados municipales, el alcalde José Luis Rendón Castañón se encerró con el síndico procurador, el director de Seguridad Pública y funcionarios del gobierno estatal. Reporteros locales trataron de conocer la versión del edil, pero hasta las 14 horas seguía reunido con esos funcionarios.

Agentes de seguridad del ayuntamiento se negaron a dar informes sobre el desalojo y dijeron ignorar que hubiera habido personas detenidas en la cárcel municipal.

Diálogo, no violencia: obispo

En relación con este desalojo, el obispo de la arquidiócesis Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro, advirtió que la violencia llama más violencia y con su uso no se arregla nada, y pidió al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que esté siempre accesible al diálogo.

Un tanto sorprendido por la pregunta, planteada durante una conferencia convocada por la arquidiócesis para difundir un mensaje de los obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco que condena la violencia en el estado, respondió que le consta que el gobernador “tiene deseos de dialogar, pero no siempre es posible”.

Según información del director general de Promoción Industrial, Agroindustrial, Minera y Artesanal, Carlos Enrique Ortega Cárdenas, el gobernador y el procurador de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia, se reunieron hace tres días para abordar la denuncia presentada contra los ejidatarios de Carrizalillo por el representante legal de las empresas Desarrollo Minero San Luis y Minera San Luis, por el bloqueo de los accesos a la mina. En esa reunión, habrían acordado que la averiguación previa siguiera su curso. Una semana atrás, los campesinos dialogaron en la Secretaría de Desarrollo Económico para llegar a un acuerdo y solicitaron que se cancelara la averiguación previa.

El titular de la secretaría, Jorge Peña Soberanis, dijo que los inconformes “tal vez tengan razón, pero no es correcta la forma en la que proceden”. Dijo que el bloqueo ocasiona que dos mil personas se queden sin empleo y “lo más grave” es cada día se pierden cerca de tres millones de pesos. Además se puede perder la oportunidad de desarrollo que tiene esa región, advirtió.